

Documento [2024036828-001-000]

correspondencia1@superfinanciera.gov.co <correspondencia1@superfinanciera.gov.co>

Vie 15/03/2024 9:35

Para: Juzgado 07 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
enviocorreocertificado@correocertificado-4-72.com <enviocorreocertificado@correocertificado-4-72.com>

 1 archivos adjuntos (251 KB)

T-2024036828-5133822.pdf;

La Superintendencia Financiera de Colombia le esta remitiendo el archivo adjunto

Número de radicación: 2024036828-001-000

Trámite: (1) ACCION DE TUTELA

Tipo documetal: (39) RESPUESTA FINAL E

Dependencia emisora: 70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: (608053) JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO BARRANQUILLA _ ATLÁNTICO

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa solamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de la Superintendencia Financiera de Colombia.

This message and any attachment may contain confidential information and is intended only for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute, use or copy this e-mail. Please notify the sender immediately if you have received this message by mistake and delete it from your system. Please note that any views or opinions presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Superintendencia Financiera de Colombia.



Radicación: 2024036828-001-000

Fecha: 2024-03-15 09:35 Sec. día 156407

Anexos: No

Trámite: 1-ACCION DE TUTELA

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 70420-70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Destinatario: 608 - 53-JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO

BARRANQUILLA _ ATLÁNTICO

Doctora

ALICIA ELVIRA GARCÍA OSORIO ---

Juez-

JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO BARRANQUILLA _ ATLÁNTICO

CALLE 40 # 44- 80

lcto07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C. (BOGOTÁ D.C)

Número de Radicación : 2024036828-001-000

Trámite : 1 ACCION DE TUTELA

Actividad : 39 RESPUESTA FINAL E

Anexos :

Respetada doctora Alicia Elvira,

De manera atenta nos referimos a la **comunicación electrónica del 14 de marzo de 2024**, a través de la cual se comunica admisión de la **ACCIÓN DE TUTELA No. 2024-00066**, promovida por **HECTOR JULIO VIDAL CADAVID**, contra la **COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – BANCO SUDAMERIS GNB – SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**, por considerar que se le está vulnerando el derecho fundamental de petición, presentado el día **24 DE ENERO DE 2024** ante las dos entidades vigiladas por este ente de control y vigilancia.

Ahora bien, una vez revisadas las bases de datos del Sistema de Gestión Documental SOLIP, que contienen la totalidad de trámites adelantados por esta Superintendencia, así como la herramienta tecnológica Smartsupervision, no se encontró queja o reclamación alguna formulada por parte del accionante, relacionada con los hechos narrados en el escrito de tutela.

Cabe destacar que en el escrito de tutela no se hace referencia o alusión a la Superintendencia Financiera de Colombia como responsable de la violación a derecho fundamental alguno, lo cual es prueba fehaciente de que esta Entidad no ha tenido participación en los posibles hechos o conductas vulnerantes.

I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Sobre el particular le informamos que una vez revisados los sistemas de gestión documental – SOLIP – y Smart Solución de esta Entidad no se encontró queja o reclamación alguna formulada por parte del señor **HECTOR JULIO VIDAL CADAVID**, respecto de los hechos que se narran en la presente demanda de tutela.

De conformidad con lo expuesto, la Superintendencia Financiera de Colombia no está legitimada en la causa por pasiva, como se explicará.

II. FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA

Vale la pena iniciar por recalcar que al respecto de la legitimación en la causa dentro de los asuntos de tutela, la Sentencia T – 1001 de 2006, estableció lo siguiente:

“La legitimación en los trámites de tutela. Anotación previa.

Dispone el artículo 10º del Decreto 2591 de 1.991 reglamentario de la acción de tutela:

Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.

Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el defensor del pueblo y los personeros municipales”.

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

(...). En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.”

A su vez, reza el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 que:

“... La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”

Por lo expuesto en precedencia es que esta Superintendencia considera, que en aplicación del

presupuesto sustancial o de fondo de la legitimidad en la causa por pasiva, que señala que las obligaciones jurídicas son exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el contrato a responder por ellas, nada tiene que ver en el asunto de ciernes toda vez que no está vulnerando derecho alguno de los invocados por el accionante.

Luego, para que la acción constitucional interpuesta concluya en una tutela judicial efectiva, es necesario que además de que se cumplan los requisitos previstos en el Decreto 2591 de 1991 y en los precedentes jurisprudenciales, exista una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama, relación que en este asunto se echa de menos.

Por lo anterior y como quiera que dentro del presente expediente no se avizora relación alguna de esta Entidad con los intereses que se discuten, o una vulneración a los derechos fundamentales alegados por el accionante que sea atribuible a la misma, la acción de tutela estará llamada a fracasar respecto de la Superintendencia Financiera, puesto que no existe un interés jurídico susceptible de ser resarcido por esta Entidad.

Vale la pena resaltar que, por regla general, en las actuaciones administrativas de la Superintendencia Financiera, *no se vigilan los actos particulares, ni los incumplimientos contractuales de las partes involucradas*, por lo tanto, las inconformidades que se presenten respecto de estos asuntos, deberán ser ventiladas a través del proceso respectivo y ante la autoridad judicial competente.

III. Naturaleza Jurídica y Funciones de la Superintendencia Financiera de Colombia

Resulta necesario reiterar que las entidades vigiladas por la SFC son sociedades que reciben dineros del público (Captación, manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público), y su actividad se encuentra autorizada y vigilada por este Organismo, dicha inspección y vigilancia es regulada conforme lo establecen las normas que se citaran más adelante, por lo tanto se infiere que esta Superintendencia no es el superior jerárquico de aquellas, pues solo se realiza frente a ellas las actuaciones administrativas necesarias conforme a las competencias legalmente establecidas, y como organismo de carácter técnico y máximo órgano de control al sistema financiero, asegurador, bursátil y previsional, debe propugnar por que los integrantes del mismo cumplan a cabalidad con las obligaciones y deberes asignados en la Ley y demás normas reglamentarias, mediante labores de auditoria preventiva y reactiva.

Es claro entonces que lo que le está permitido a esta Superintendencia en ejercicio de sus funciones, sin que eso lo lleve a considerarse como un superior jerárquico de sus vigiladas, es realizar las averiguaciones pertinentes, dentro del proceso administrativo correspondiente, verificando la legalidad de las actuaciones de la vigilada respecto del consumidor financiero, quien actúa bajo la orientación y coordinación de este Organismo, con un grado de relación de dependencia no funcional y no jerárquico, actuación administrativa que ya se encuentra adelantando esta Entidad respecto del caso en cuestión.

En desarrollo de lo anterior, es necesario manifestar que la Superintendencia Financiera de Colombia es un Organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, encargada de ejercer

funciones de control, inspección y vigilancia sobre las entidades que conforman los sectores financiero, asegurador, bursátil y previsional del país, teniendo como objetivo supervisar el sistema financiero colombiano, de acuerdo con la facultad consagrada y delegada en los artículos 189 numeral 24 y 211 de la Constitución Política.

Se advierte entonces, que este Organismo de Control y Vigilancia, tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

En tal sentido, esta Superintendencia ejerce las funciones establecidas en el Decreto 2739 de 1991, Decreto 663 de 1993, la Ley 964 de 2005, Decreto 2555 de 2010, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y las demás normas que las modifiquen o adicionen, así como las que le delegue el presidente de la República.

Así, de acuerdo con nuestro marco normativo es claro que esta Superintendencia no cuenta con las facultades legales que permitan adoptar medidas para obligar a nuestras entidades vigiladas al cumplimiento de órdenes judiciales particulares, por cuanto **no tiene la calidad de superior jerárquico** de las mismas; en este punto resulta del caso precisar que esta Superintendencia, dado su carácter de entidad pública, solamente puede realizar aquellas funciones para las cuales ha sido expresamente facultada, conforme al artículo 121 de la Constitución Política, a cuyo tenor dispone “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

Resulta oportuno advertir que las funciones encomendadas a esta Entidad no pueden ir más allá de la fijadas por la Constitución y la Ley, pues si bien es cierto la entidad accionada hace parte de nuestras vigiladas, esta Superintendencia sólo se encarga de ejercer Supervisión sobre aquella, con el fin de que su administración se ajuste a las disposiciones Constitucionales, Legales correspondientes y a las contenidas en los Reglamentos de la entidad Vigilada, en tal sentido no puede inferirse que la Inspección, Vigilancia y Control que se realiza sobre aquella, se extienda al punto de considerarse a la Superintendencia Financiera como su superior jerárquico o funcional.

Al tenor de lo anterior, es preciso señalar que la expresión “Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia” significa que existe una institución que autoriza y vigila la actividad que realizan las entidades que reciben dineros del público, donde la ciudadanía ahorra, invierte su capital, tiene un crédito, un seguro o su pensión.

Bajo este contexto, se resalta que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como misión “...*preservar la confianza pública de los ciudadanos y la estabilidad del sistema financiero, mantener la integridad, eficiencia y transparencia del mercado de valores y demás activos financieros, de igual manera, velar por el respeto de los consumidores financieros. Así, ejerce la inspección, vigilancia y control de quienes realizan la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo o inversión de recursos recibidos (captados) del público.*”^[3], situación que no la convierte en el superior jerárquico de sus vigiladas.

Así, de acuerdo con nuestro marco normativo, es claro que **esta Superintendencia no cuenta con las facultades legales que permitan adoptar medidas para obligar al cumplimiento de**

órdenes judiciales particulares, como tampoco adelantar actuaciones de índole disciplinario en contra de los funcionarios de las entidades vigiladas, por cuanto no tiene la calidad de superior jerárquico o funcional de las mismas.

Cabe agregar que el régimen sancionatorio existente se aplica, siempre de acuerdo con las funciones y competencias de la Superintendencia Financiera, y por tratarse de una norma de carácter restrictivo, no admite aplicación analógica ni extensiva alguna.

IV. Petición.

En virtud de lo anterior, y toda vez que este Organismo de Control y Vigilancia, no ha vulnerado los derechos invocados por el tutelante, y en efecto no hay pretensión alguna dirigida contra esta Entidad, **se solicita DESVINCULAR a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, o en su defecto NEGAR, las pretensiones de la presente acción constitucional.**

Cordialmente,



T.P. 143 759 del C.S.J.
C.C.80 407 100 de Bogotá.

WILLIAM GOMEZ TEQUIA

70426-Funcionario Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos
70420-GRUPO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS

Copia a:

Elaboró:

WILLIAM GOMEZ TEQUIA

Revisó y aprobó:

WILLIAM GOMEZ TEQUIA